



RESOLUCIÓN No. CSJBOR21-1213
21/09/2021

“Por medio de la cual se decide una vigilancia judicial administrativa”

Vigilancia judicial administrativa No.: 13001-11-01-001-2021-00618-00

Solicitante: Alvaro Arnaldo Burgos Galvis

Despacho: Juzgado 1° Civil del Circuito de Simití

Funcionario judicial: Karen Margarita Madrid Vélez

Clase de proceso: Declarativo

Número de radicación del proceso: 2016-00159

Magistrada ponente: Patricia Rocío Ceballos Rodríguez

Fecha de sesión: 15 de septiembre de 2021

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de vigilancia judicial administrativa

El doctor Álvaro Burgos Galvis, en calidad de apoderado de la parte demandante dentro del proceso declarativo con radicado 2016-00159, que cursa ante el Juzgado 1° Civil del Circuito de Simití, solicitó la vigilancia judicial, dado que, según lo afirma, se encuentra pendiente proferir sentencia, sin que a la fecha el despacho haya procedido de conformidad, pese a presentar impulso en tal sentidos los días 6 de abril, 13 de abril y 6 de noviembre de 2018; 19 de noviembre y 16 de diciembre de 2020 y 6 de mayo de 2021.

2. Trámite de la vigilancia judicial administrativa

Mediante auto CSJBOAVJ21-901 de 6 de agosto de 2021, se requirió a la doctora Karen Margarita Madrid Vélez, Jueza 1° Civil del Circuito de Simití y a la secretaria de esa agencia judicial, para que suministraran información detallada sobre el proceso de marras, otorgando el término de 3 días contados a partir del día siguiente de la comunicación del referido auto, actuación surtida el día 9 de agosto de la presente anualidad.

3. Informes de verificación

3.1. Informe funcionario judicial

Dentro de la oportunidad para ello la doctora Karen Margarita Madrid Vélez, Jueza 1° Civil del Circuito de Simití, rindió el informe solicitado y afirmó bajo la gravedad de juramento (artículo 5° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011) que, en efecto se encuentra pendiente dictar sentencia, por lo que por auto de 12 de agosto de 2021 se señaló fecha de audiencia.

3.2. Informe empleado judicial

Vencido el término otorgado, el secretario del Juzgado 1° Civil del Circuito de Simití, no rindió el informe solicitado

4. Solicitud de explicaciones

Por auto CSJBOAVJ21-944 del 17 de agosto de 2021, se dispuso solicitar a la doctora Karen Margarita Madrid Vélez, Jueza 1° de Civil del Circuito de Simití y al secretario de esta agencia judicial, las explicaciones, justificaciones, informes, documentos y pruebas que pretendieran hacer valer, otorgando el término de tres días contados a partir de la comunicación de ese auto, actuación surtida el día 9 de septiembre de 2021.

4.1. Explicaciones funcionario judicial

Dentro de la oportunidad otorgada, la doctora Karen Margarita Madrid Vélez, Jueza 1° de Civil del Circuito de Simití, explicó que, i) por auto de 12 de agosto de 2021 se fijó fecha para audiencia de fallo; ii) sostuvo que con ocasión de la creación del Juzgado Penal del Circuito de Simití fue posible la organización del trabajo y la asignación de turnos a los procesos de naturaleza civil y laboral, dado el número de procesos con trámites pendientes con los que recibió el despacho, lo cual se realizó conforme a la fecha de presentación de las solicitudes y a la complejidad de los asuntos; iii) indicó que la demora en el trámite del proceso de la referencia obedeció al cúmulo de asuntos penales con los que contaba el despacho cuando era de naturaleza promiscuo, lo que en su decir restaba tiempo para evaluar los proyectos civiles y laborales, así como la falta de personal suficiente y capacitado para la labor de sustanciación, dado que de los tres empleados que conforman la planta de personal del despacho, solo uno es abogado.

4.2. Explicaciones empleado judicial

Vencido el término otorgado, el secretario del Juzgado 1° Civil del Circuito de Simití, no rindió las explicaciones solicitadas.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es competente para conocer sobre la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida por el doctor Álvaro Burgos Galvis, conforme a lo prevenido en el artículo 1° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, reglamentario del numeral 6° del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, habida cuenta que la petición se dirige en contra de uno de los despachados judiciales de esta circunscripción territorial.

2. Problema administrativo

Conforme a los hechos en que se funda la solicitud y de las explicaciones rendidas por el funcionario judicial, corresponde a esta Corporación determinar si han existido actuaciones y omisiones en el decurso del proceso de la referencia, en específico sobre la mora judicial alegada, que involucren un desempeño contrario a la administración oportunidad y eficaz de justicia.

En caso de estimarse lo anterior, atendiendo a que el solicitante enuncia circunstancias de mora judicial, se determinará la procedencia de la imposición de correctivos administrativos o compulsas de copias a la jurisdicción disciplinaria contra el servicio judicial determinado.

Para resolver la cuestión planteada, se deberá abordar los temas relacionados a continuación.

3. Alcances de la vigilancia judicial administrativa

El Acuerdo PSAA11-8716 de octubre 6 de 2011, adopta el reglamento respecto del mecanismo de la vigilancia judicial administrativa consagrada en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y establece en su artículo 1° que se concibe *“para que la justicia se administre oportuna y eficazmente”* y que *“es diferente de la acción disciplinaria a cargo de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias”*, lo que conduce a inferir que el estudio se ciñe a determinar: i) cuestiones de incumplimiento de términos actuales porque las anomalías pasadas deben ser objeto de los procesos disciplinarios; ii) si un funcionario incurrió en acciones u omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de justicia; y iii) si existe una actuación en forma negligente o si por el contrario su tardanza se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación o responsabilidad.

De otra parte, el artículo 14 del Acuerdo en comento prescribe: *“Independencia y autonomía judicial. En desarrollo de las actuaciones de vigilancia judicial administrativa, los Magistrados de la Sala Administrativa competente deberán respetar la autonomía e independencia de los funcionarios, de tal suerte que en ningún caso podrán sugerir el sentido en que deben proferir sus decisiones”*. Dicha norma se encuentra en consonancia con lo contemplado en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política y el artículo 5° de la Ley 270 de 1996, lo cual significa que la institución de la vigilancia judicial administrativa, como mecanismo administrativo que es, no está diseñado para controvertir decisiones judiciales, ni la forma cómo un funcionario interpreta una norma o valora las pruebas. Así mismo, es pertinente resaltar que este trámite no es otra instancia judicial y no puede emplearse para revivir términos.

En conclusión, esta atribución del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es de naturaleza eminentemente administrativa y separada de la función jurisdiccional disciplinaria contra jueces y abogados, que le corresponde a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

4. El derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8°, prevé dentro de las garantías procesales, el derecho de toda persona *“a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable (...)”*.

Por su parte, la Constitución Política en sus artículos 29 y 229 consagran los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, respectivamente, lo cuales comprenden las prerrogativas que se enuncian a continuación: i) el derecho que tiene toda persona de poner en funcionamiento el aparato judicial, ii) el derecho a obtener una respuesta oportuna, y iii) el derecho a que no se incurran en omisiones o dilaciones injustificadas en las actuaciones judiciales.

La anterior consagración implica el deber de todas las autoridades públicas de observar de manera diligente los términos y adelantar de manera oportuna los trámites judiciales de que conoce, en tanto su inobservancia y la dilación injustificada *“(...) pueden conllevar la vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración en general, y a la administración de justicia en particular”*¹, amén de resultar lejana la efectividad de una justicia material en el caso concreto.

¹ T-297-06.

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional ha considerado también que *“el incumplimiento de los plazos judiciales tiene un carácter excepcional, pues la regla general, contenida en el artículo 228 superior, es la obligatoriedad de los términos procesales”*², en ese sentido, se admite en casos excepcionales que el incumplimiento de los términos procesales no le es directamente atribuible al funcionario judicial en tanto *“la mora, la congestión y el atraso judiciales son algunos de los fenómenos que afectan de manera estructural la administración de justicia en Colombia”*³.

En ese orden, con relación a la mora judicial, mediante sentencia T-052 de 2018, la Corte Constitucional precisó:

“La mora judicial es un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos.

(...)

Dentro del deber de garantizar el goce efectivo del derecho, se encuentra incluida la solución célere de los asuntos adelantados ante funcionarios judiciales, por ello, esta Corte ha determinado la prohibición de dilaciones injustificadas en la administración de justicia (...).

Al respecto, en Sentencia T-230 de 2013, reiterada en la T-186 de 2017, entre otras, la Sala Tercera de Revisión expuso las circunstancias en las cuales se configura la mora judicial injustificada: “(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial”.

(...)

En el mismo fallo, se enunciaron las circunstancias en las que se encuentra justificado el incumplimiento de los términos judiciales señalados por la jurisprudencia constitucional, resumidos de la siguiente manera: “(i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley”.

También respecto a este asunto, el Consejo de Estado⁴ ha expresado: *“(...) no existe mora judicial por el solo transcurso del tiempo, sino que esta debe ser injustificada, debe estar probada la negligencia de la autoridad judicial demandada y que sea probable la existencia de un perjuicio irremediable. Si por el contrario, la actuación de los falladores de instancia es célere y diligente, pero por circunstancias imprevisibles no es posible dar cumplimiento a los términos judiciales, tampoco se configura la alegada mora judicial”.*

² T-190-95, T-1068-04, T-803-12 entre otras.

³ T-741-15.

⁴ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. Consejera ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia. Sentencia del 23 de enero de 2014. Radicado 11001-03-15-000-2013-02547-00(AC).

Quiere decir lo anterior, que para determinar si se está o no frente a una dilación justificada es necesario realizar un análisis valorativo y la comprobación de las circunstancias en el caso concreto, *“juicio ciertamente complejo en el que “deben tomarse en consideración las circunstancias particulares del despacho que adelanta la actuación y del trámite mismo, entre las que se cuentan: i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión de la dependencia, ii) el cumplimiento de las funciones propias de su cargo por parte del funcionario, iii) la complejidad del caso sometido a su conocimiento y iv) el cumplimiento de las partes de sus deberes en el impulso procesal”⁵.*

Por tanto, la omisión o dilación en el cumplimiento de los términos procesales en cuanto su relevancia constitucional está ligada a la relación intrínseca entre la carga funcional y el cumplimiento de los deberes a su cargo.

En conclusión, puede afirmarse válidamente que, de conformidad con la jurisprudencia sentada por estas corporaciones, la mora judicial que configura vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, se caracteriza por (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente, (ii) la falta de motivo razonable y prueba de que la demora es debida a circunstancias que no puede contrarrestar y directamente relacionada con el punto anterior, y, (iii) la omisión en el cumplimiento de sus funciones por parte del trabajador, debido a la negligencia y desidia respecto de sus obligaciones en el trámite de los procesos.

A su turno, cuando se presenta un incumplimiento de los términos procesales, la prosperidad de las causales eximentes de sanción administrativa corresponde examinarlas en cada caso concreto. El incumplimiento de los términos se entiende justificado *“(i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constatan problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución del caso en el plazo previsto en la ley”⁶.*

Lo descrito en precedencia, fue tenido en cuenta en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, cuando en el artículo 7º dijo:

“(…) la respectiva Sala Administrativo del Consejo Seccional de la Judicatura, decidirá si ha habido un desempeño contrario a la administración oportuna y eficaz de la justicia en el preciso y específico proceso o actuación judicial de que se trate.

Para el efecto se tendrá en cuenta que el hecho no obedezca a situaciones originadas en deficiencias operativas del despacho judicial, no atribuibles al servidor judicial, así como los factores reales e inmediatos de congestión no producidos por la acción u omisión del funcionario o empleado requerido, todo lo cual lo exime de los correctivos y anotaciones respectivas.”

Implica lo anterior, que en el trámite de una vigilancia judicial administrativa cada caso concreto debe analizarse de manera particular y observarse las circunstancias propias del despacho vigilado así como la gestión del servidor judicial, entre esos aspectos, la carga efectiva, los ingresos efectivos y la productividad entre otros, que permitan concluir, en el evento de no acatarse el término perentorio e improrrogable, la existencia de razones no sólo que la expliquen sino que la justifiquen, pues no es admisible que frente a circunstancias objetivas de dificultad en la gestión judicial se exija el cumplimiento

⁵ T-1249-04.

⁶ Cfr. Sentencia T-803 de 2012.

inexorable de los términos, pues si bien su incumplimiento es sancionable, tal hecho “*se exculpa cuando se presenta una causa extraña o cuando se desborda la capacidad física del funcionario con la cantidad de trabajo que le corresponde en ese determinado momento (...)*”⁷.

5. Plazo razonable como elemento fundamental para determinar la configuración de mora judicial

Aunado a lo expuesto en el acápite anterior, es fundamental ahondar sobre lo que debe entenderse por plazo razonable en la resolución de los procesos judiciales, como quiera que éste constituye un elemento determinante para establecer la configuración o no de la mora judicial en un caso específico.

En ese orden, el plazo razonable, es concebido como una forma de garantizar que la duración de los procesos y actuaciones judiciales no conlleven a una vulneración de derechos de quienes acceden a la administración de justicia.

Sobre el tema, la Corte Constitucional en sentencia SU-394 de 2016, se apoyó en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que establece⁸: “*Respecto a la garantía del plazo razonable la Corte ha establecido que es necesario tomar en consideración cuatro elementos a fin de determinar su razonabilidad: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado, c) conducta de las autoridades judiciales⁹ y d) los efectos que la demora en el proceso puedan tener sobre la situación jurídica de la víctima¹⁰”.*

A su turno, el Consejo de Estado ha señalado: “*(...) para la determinación de qué se entiende por “violación o desconocimiento del plazo razonable” corresponde al juzgador analizar las condiciones de tiempo, modo y lugar, así como los factores internos y externos en los que se presta el servicio, en otros términos, con qué instrumentos o herramientas se contaba para adoptar la decisión y, por lo tanto, si no existen circunstancias que justifiquen el retardo en la definición del asunto administrativo o jurisdiccional*”¹¹.

6. Caso concreto

Descendiendo al caso concreto se tiene que el objeto de la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida por el doctor Álvaro Burgos Galvis recae en la presunta mora en la que se encuentra incurso el Juzgado 1° Civil del Circuito de Simití en dictar sentencia dentro del proceso de la referencia.

En atención a la apertura de la vigilancia judicial administrativa, la doctora Karen Margarita Madrid Vélez, Jueza 1° de Civil del Circuito de Simití, explicó que: i) por auto de 12 de agosto de 2021 se fijó fecha para audiencia de fallo; ii) sostuvo que con ocasión de la

⁷ T-346-12.

⁸ Caso Osorio Rivera y familiares vs Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. párr. 200, y Caso Forneron e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de abril de 2012. Párr. 67.

⁹ Cfr. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, supra, párr. 77, y Caso Luna López Vs. Honduras, supra, párr. 189.

¹⁰ Caso Valle Jaramillo Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 155, y Caso Luna López Vs. Honduras, supra, párr. 189.

¹¹ Ver sentencia 52001-23-31-000-2005-00551-01(39524), 29 de febrero de 2016.

creación del Juzgado Penal del Circuito de Simití fue posible la organización del trabajo y la asignación de turnos a los procesos de naturaleza civil y laboral, dado el número de procesos con trámites pendientes con los que recibió el despacho, lo cual se realizó conforme a la fecha de presentación de las solicitudes y a la complejidad de los asuntos; iii) indicó que la demora en el trámite del proceso de la referencia obedeció al cúmulo de asuntos penales con los que contaba el despacho cuando era de naturaleza promiscuo, lo que en su decir restaba tiempo para evaluar los proyectos civiles y laborales, así como la falta de personal suficiente y capacitado para la labor de sustanciación, dado que de los tres empleados que conforman la planta de personal del despacho, solo uno es abogado.

Analizada la solicitud de vigilancia judicial administrativa, de las explicaciones rendidas por la funcionaria judicial y de las pruebas obrantes en el plenario, es posible extraer las siguientes actuaciones surtidas dentro del proceso de marras:

No	Actuación	Fecha
1	Solicitud de sentencia	6/04/2018
2	Impulso	13/04/2018
3	Impulso	6/11/2018
4	Impulso	19/11/2020
5	Impulso	16/12/2020
6	Impulso	6/05/2021
7	Requerimiento efectuado por la seccional dentro de la vigilancia judicial	9/08/2021
8	Auto fija fecha de audiencia de fallo	12/08/2021
9	Notificación por correo electrónico	13/08/2021

Analizadas las actuaciones señaladas en precedencia, se advierte que mediante auto de 12 de agosto de 2021 el despacho judicial encartado fijó fecha de audiencia para dictar sentencia, proveído que fue notificado por correo electrónico el día 13 de agosto de 2021, esto es luego de transcurridos 3 años desde la fecha presentación de la solicitud del quejoso y con ocasión del requerimiento efectuado por la seccional el día 9 de abril del corriente año, término que supera ostensiblemente la tarifa señalada en el artículo 373 del Código General del Proceso, el cual impone la obligación al juez de fijar fecha para la celebración de la audiencia de instrucción y juzgamiento.

No obstante lo anterior, en atención a lo señalado por la funcionaria judicial según lo cual la carga de procesos penales con que contaba el entonces Juzgado Promiscuo del Circuito de Simití, hoy Juzgado 1° Civil del Circuito de Simití, impedía el trámite célere de los asuntos civiles y laborales a su cargo, debe indicarse que en efecto el despacho judicial presentaba una alta carga laboral, dado que se trataba del único juzgado categoría circuito de esa municipalidad, el cual tenía a cargo asuntos de naturaleza penal, civil y laboral.

En virtud de lo anterior y ante la demanda de justicia, el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PCSJA20-11650 de 28 de octubre de 2020 dispuso la creación de un Juzgado Penal en el Circuito Judicial de Simití, con el ánimo de atender los asuntos penales que hasta entonces eran de conocimiento del Juzgado Promiscuo del Circuito de esa misma municipalidad.

Al respecto, vale la pena traer a colación lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia SU-333 de 2020 en la cual destacó que (...) *“el respeto a los términos procesales debe ser perentorio y de estricto cumplimiento por*

parte de los funcionarios judiciales, **por lo que el incumplimiento injustificado acarrea sanciones disciplinarias.** (Subrayas y negrillas nuestras).

Igualmente, señaló la Corporación que para determinar la configuración de dilaciones injustificadas al interior de los procesos judiciales es necesario examinar si la mora atribuida a los servidores judiciales: “(i) es fruto de un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial.”

En ese sentido, vale la pena relacionar la carga de procesos del despacho judicial a corte 31 de diciembre de 2020, teniendo en cuenta que el Juzgado 1° Civil del Circuito de Simití inició labores a partir del 1 de enero del 2021:

Inventario Inicial	Ingresos	Egresos Totales	Egresos Efectivos	Inventario Final Dic 31/20	Cantidad de procesos penales a dic 31/20
1032	213	173	139	1072	708

Nótese que, del total de inventario final reportado el 66.04% correspondían a procesos penales, lo que permite a la sala colegir que la perentoriedad de los asuntos de dicha naturaleza forzaban a la funcionaria judicial a dejar de lado el estudio de los procesos civiles y labores, lo cual a juicio de la sala constituye un motivo razonable que justifica el hecho de que el despacho no hubiera fijado con anterioridad fecha para la celebración de la audiencia de instrucción y juzgamiento, pues es claro que la carga laboral del juzgado, especialmente en asuntos penales, dificultaba la resolución de los asuntos de otra naturaleza.

Corolario de lo anterior, no se avizoran razones para imponer los correctivos de que trata el Acuerdo PSAA11-8716 de octubre 6 de 2011, por lo que se dispondrá el archivo del presente trámite.

7. Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, esta seccional no encuentra razón para endilgarle responsabilidad a los servidores judiciales requeridos, pues no se evidencia una situación de deficiencia que deba ser normalizada a través de la vigilancia judicial administrativa, por lo que se dispondrá el archivo de este trámite.

De conformidad con lo expuesto, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar,

8. RESUELVE

PRIMERO: Archivar la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida por el doctor Álvaro Burgos Galvis, dentro del proceso declarativo con radicado 2016-00159, que cursa ante el Juzgado 1° Civil del Circuito de Simití, por las razones anotadas.

SEGUNDO: Comunicar la presente resolución a los involucrados en el trámite administrativo.

Resolución Hoja No. 9
Resolución No. CSJBOR21-1213
21 de septiembre de 2021

TERCERO: Contra esta decisión solo procede recurso de reposición, que deberá ser interpuesto dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación o comunicación, ante esta misma corporación, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, art. 74 y siguientes.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



IVÁN EDUARDO LATORRE GAMBOA
Presidente

M.P. PRCR/KYBS